

Movimiento urbano, ecología e intereses sociales: experiencias de la Barcelona postolímpica

Author(s): Albert Recio

Source: *Mientras Tanto*, No. 54 (Mayo-Junio 1993), pp. 15-28

Published by: Ediciones de Intervención Cultural

Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/27820061>

Accessed: 14-02-2022 12:43 UTC

JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at

<https://about.jstor.org/terms>



JSTOR

Ediciones de Intervención Cultural is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to *Mientras Tanto*

Movimiento urbano, ecología e intereses sociales: experiencias de la Barcelona postolímpica

ALBERT RECIO

La importancia de la problemática medioambiental se ha ido afirmando paulatinamente a medida que los análisis críticos de los ecologistas, tanto desde el campo de los núcleos de activistas como de los simples estudiosos de cuestiones ambientales, reafirmaban la relevancia de lo que estaban denunciando. La larga serie de desastres ecológicos ha demostrado lo adecuado de muchas de las previsiones realizadas y ha servido para empezar a legitimar la «cuestión ecológica». Si hace años hablar de estos temas era exclusivo de los núcleos más concienciados es evidente que, al menos a nivel de eslogan, el tema ha entrado en la mayor parte de programas políticos y en gran parte de la publicidad consumista. Se ha pasado de tratar las demandas ecológicas de enemigas del progreso a la formulación de etéreas propuestas de «desarrollo sostenible», o incluso a articular sobre la cuestión medioambiental el discurso publicitario de alguno de los peores enemigos del medio ambiente¹. Cuando una cuestión es tan grave y evidente como ésta, nadie puede eludirla del todo sin correr el riesgo de perder credibilidad.

Este aumento de atención que ha obtenido la cuestión ecológica confiere una mayor legitimidad a la acción de los propios ecologistas pero, a la vez, plantea nuevos problemas que inexorablemente será necesario discutir con seriedad. Hoy ya no es posible construir un movimiento alternativo a partir de la mera apelación a «lo verde», por más que la referencia a la ecología sea poco más que propaganda en la inmensa mayoría de formaciones políticas tradicionales, y de que la defensa del medio ambiente dependa aún crucialmente

1. Ver especialmente GREENPEACE: «La estrategia del lavado de imagen», mayo, 1992.

de movimientos que se reconocen explícitamente como ecologistas. No se trata sólo de la existencia de una importante «contaminación publicitaria» en torno a estas cuestiones, sino de que el tratamiento de los problemas ecológicos genera cada vez más una serie de cuestiones que van más allá de la simple concepción de la «defensa medioambiental» al afectar a un amplio conjunto de cuestiones sociales diversas. O por decirlo de otra manera, si bien es bastante posible que finalmente se empiecen a adoptar algunas medidas «medioambientales», no sólo la intensidad con que se realicen sino los efectos sociales que produzcan dependerán de las orientaciones políticas globales y de los núcleos sociales que dirijan el proceso. Por esto un movimiento ecológico de raíz igualitaria se debe plantear al mismo tiempo la defensa del medio ambiente y el modelo de sociedad por el que lucha, los sectores sociales a los que se dirige, las alianzas que está dispuesto a desarrollar, y, en fin, el proyecto político social al que se orienta su acción.

La tarea no es sencilla, especialmente cuando el grueso de muchos esfuerzos activistas ha tenido que concentrarse en la respuesta a agresiones directas, y la desvertebración organizativa no ha facilitado una discusión abierta. Con todo, se empieza a producir un debate a los que estas notas pretenden sumarse. Hasta ahora la propuesta más sugerente de movimiento social alternativo ha sido la de un «neopopulismo ecológico»². Con razón, se subraya que las luchas de muchos pueblos en defensa de sus formas de vida tradicionales permiten crear una base social entre los pobres de la tierra en favor de la defensa del medio ambiente³. Si bien estos análisis introducen una interesante reflexión sobre la forma de articular la defensa, a la vez, de las personas y las tierras del sur, resulta totalmente insuficiente para hacer avanzar las alternativas ecologistas en el medio social en el que nos movemos.

La cuestión ecológica no sólo va a decidirse en la defensa del espacio rural, sino que tiene uno de sus puntos nodales en las ciudades. No sólo una parte creciente de la población mundial vive en ciudades, sino que éstas generan las demandas materiales básicas que afectan al medio ambiente global e incluso propagan el modo de vida que toman, como punto de referencia, una parte creciente de los habitantes del planeta. Por eso estimo que el ecologismo igualitaria tiene en las ciudades uno de los espacios de desa-

2. Con distintas versiones estimo que esta es la propuesta tanto de J. Martínez Alier en *De la economía ecológica al ecologismo popular*, Icaria Editorial, Barcelona 1992, y, más explícitamente la de M. González de Molina y E. Sevilla Guzmán, «Una propuesta de diálogo entre socialismo y ecología: el neopopulismo ecológico», en *Ecología Política*, 3, 1992.

3. Resultan a este respecto especialmente interesantes las entrevistas a Chico Mendes (en *Ecología Política*, 2, 1991) y a Anil Agarwal y Ashish Kothari (en *Ecología Política*, 5, 1993).

rrollo básicos, y en ellos la pista del neopopulismo tradicional no me parece adecuada. Especialmente porque en el mundo urbano no se trata de «defender» un modelo de vida existente, sino de transformar uno que ha alcanzado una gran implantación. Hasta ahora la lucha ecológica, al menos en nuestro estado plurinacional, se ha desarrollado en defensa de espacios rurales (a excepción quizás de la lucha antinuclear) y sólo en los últimos tiempos empiezan a producirse movimientos de interés en el campo de la ecología urbana (por ejemplo, el del referéndum sobre el tráfico en Madrid), básicas para empezar a plantear un movimiento de transformación global del entorno ambiental.

En las notas que siguen me dedico a pasar revista a tres iniciativas urbanas que han confluido en los últimos tiempos en la ciudad de Barcelona y en su área cercana. Tres iniciativas que tienen en común el hecho de tratarse de cuestiones urbanas, todas ellas relacionadas con las alternativas medioambientales, pero que se plantean desde ángulos y fórmulas muy diferentes. Creo que lo más interesante de las mismas es que llevan procesos de aprendizaje para el desarrollo de un movimiento de ecología urbana de largo alcance. Mi objetivo es simplemente hacer una crónica comentada de los mismos, en la que los interrogantes son mayores que las respuestas, pero donde la variedad de determinantes que confluyen en los mismos puede favorecer un debate más maduro sobre el tema.

Movimiento urbano y ecologismo en Barcelona

En gran medida el movimiento urbano barcelonés y el incipiente movimiento ecologista han estado bastante desconectados. El primero surgió a finales de los sesenta y principios de los setenta en torno a demandas de equipamientos y de democracia política, cristalizando en la formación de una vasta red de Asociaciones de Vecinos que se implantaron en los diversos barrios de la ciudad. Su desarrollo fue especialmente promovido por la izquierda de la época que encontró no sólo un espacio de lucha abierto, por el tamaño de las agresiones urbanísticas y las carencias de servicios, sino también un resquicio legal para poder realizar abiertamente algunas actividades políticas. La transición política y el surgimiento de los nuevos ayuntamientos desarboló este movimiento, en parte por la cooptación de viejos activistas en las estructuras políticas convencionales, en parte por el abandono del activismo social de muchas personas, y quizás también porque al conseguirse alguna de las reivindicaciones más inmediatas cedió la presión popular. Con todo, el movimiento no ha desaparecido por completo, se han mantenido pequeños núcleos organizados que han seguido realizando una cierta actividad de agitación social. En mayor medida este activismo se ha mantenido en los

barrios de clase obrera donde los problemas siguen siendo más candentes y la gente está más dispuesta a participar en movilizaciones para conseguir aquello que individualmente no puede obtener.⁴

Los primeros núcleos ecologistas, surgidos en un período posterior, tendieron a ignorar este movimiento cuando no a criticarlo abiertamente. Existen bastantes razones que explican este divorcio. La preocupación básica por el espacio natural de parte ecologista tenía a minimizar la importancia de las luchas urbanas. En bastantes casos el movimiento asociativo era visto como un modelo de organización burocrática defensor de proyectos directamente enfrentados a un proyecto ecológico. Esta percepción se generó tanto por algunos resabios de raíz libertaria de algunos activistas ecológicos, por desconocimiento mútuo y por el propio hecho innegable de que en bastantes casos han existido organizaciones vecinales con actuaciones burocráticas y poca sensibilidad ecológica. En todo caso estos factores han aislado durante mucho tiempo un incipiente movimiento ecológico de un movimiento asociativo en declive pero que aún constituía en muchos casos una de las mayores instancias de articulación social alternativa.

El debate sobre la «Barcelona olímpica» constuyó desde mi punto de vista una derrota para ambos movimientos. Derrota que no apareció abiertamente por el hecho de que ninguno de ambos movimientos fue capaz de discutir y plantear alternativas claras a lo que se presentó desde el poder como «una ocasión única para la ciudad». De hecho hubo algunos intentos de respuesta. En algunos barrios de la ciudad se organizaron debates y actividades críticas al proyecto (especialmente en Poble Nou, la zona más afectada por el proyecto olímpico, y en Nou Barris, el distrito obrero de la ciudad) pero estas fueron rápidamente acalladas por falta de interlocutores.⁵ La Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona adoptó una postura ambigua en un contexto general de apoyo a los juegos.

Sólo cuando el proyecto ya estaba en marcha y los efectos urbanísticos empezaban a concretarse empezaron a producirse movimientos que permitie-

4. Las clases medias tienen más oportunidades de recurrir al mercado para satisfacer muchas de sus necesidades, aunque es posible que las pautas culturales sobre el comportamiento adecuado expliquen también una parte de los hábitos diferenciales en materia de participación social (desde acudir a manifestaciones hasta el hecho de recoger un panfleto que se reparte a la salida del metro) que se observa en distintos barrios del área barcelonesa.

5. Se creó una plataforma de lucha contra el proyecto olímpico controlada por grupos independentistas, que pronto acabarían centrando su reivindicación en la demanda de un equipo olímpico catalán, y por grupos que plantearon un enfrentamiento global (reunidos alrededor de la publicación informal NOO92) que era difícilmente comprensible para la mayor parte de la ciudadanía. Faltó en cambio el debate serio sobre los efectos que el proyecto urbanístico iban a tener para la ciudadanía a pie.

ron una cierta recuperación del movimiento vecinal y abrieron un espacio de crítica ciudadana.⁶ Esta se manifestó especialmente en luchas contra los proyectos especulativos más descarnados: la privatización del puerto, de Piscinas y Deportes (un espacio verde y deportivo municipal), o la inexistencia de vivendas públicas en la Villa Olímpica, y en aquellas que trataron de minimizar el impacto de las obras olímpicas. La forma como se han construido los cinturones muestra por sí sola las orientaciones socio-ambientales de los responsables políticos. Sin contar el hecho innegable de que estos significan una clara apuesta por el transporte privado individual,⁷ los impactos ambientales directos han sido tratados de forma diferente en las diversas partes de su recorrido. Un viandante que sin información recorra la renombrada «Ronda de Dalt» desde el Llobregat hasta el Besós se encontrará con un primer sector donde éste está cubierto en su mayor parte, pasará después una parte central descubierta (justo en la zona donde está ubicado el mayor centro hospitalario de la ciudad), para volver a encontrarse con tramos cubiertos en la zona de Nou Barris y acabar en un dantesco paisaje de asfalto al llegar al valle del Besós. La razón de estas diferencias se entienden bien en términos de clases y movimientos sociales. La primera de las áreas cubiertas corresponde a la zona de Pedralbes-Bonanova, la más elitista de la ciudad, donde la decisión de cubrirla se justificó para preservar el monasterio gótico de Pedralbes. La otra zona cubierta es el resultado de una larga lucha del movimiento vecinal de la zona que obligó a variar sustancialmente los planes iniciales de «cinturón duro». El área central descubierta cruza barrios de capas medias (funcionarios municipales, trabajadores de la sanidad, técnicos) en los que existe un bajo nivel de organización social que permitió abaratar los costes del proyecto por la vía de aumentar el ruido, la contaminación y el aislamiento que deben padecer los habitantes de esta zona de la ciudad.

Estas luchas de resistencia han servido al menos para reabrir un cierto debate que ya ha empezado a plasmarse en algunas cuestiones.⁸ Por una parte ha acelerado la conciencia ecológica de un sector del movimiento vecinal al tiempo que ha generado que algunos de los núcleos ecologistas hayan retomado interés por las cuestiones urbanas. Un interés que posiblemente no se ha fraguado exclusivamente en estas luchas y debates en torno al modelo urba-

6. El análisis crítico del modelo urbanístico olímpico tiene algunas referencias: E. Moreno/M. Vázquez Montalbán, *Barcelona cap a on vas?*, Ed. El Triangle, Barcelona 1991; J. Martínez Alier, «La Barcelona olímpica», *Ecología Política*, 2, 1991; A. R., «Especulación en la Barcelona Olímpica», *Mientras Tanto*, 43; y AA.VV., «La Barcelona de Maragall», *La Veu del Carrer*, n.º 10-11, noviembre 1992.

7. Que ha tenido el efecto de reducir el uso de transporte público, tras una tendencia de recuperación en los últimos años (*El Periódico*, 10 mayo 1993).

8. En 1991 la FAVB organizó unas jornadas sobre el tráfico urbano, al tomar conciencia de la importancia creciente del problema.

no, sino también por la experiencia previa de colaboración en otras movilizaciones sociales en el plano ciudadano (la guerra del golfo, la iniciativa popular antinuclear etc.). La situación ecológica y socialmente crítica en la que ha quedado la Barcelona postolímpica abre la posibilidad de un reencuentro entre movimientos ecológicos y vecinales que no puede desaprovecharse. Las experiencias que pasamos a comentar deben permitirnos descubrir como llevarlas a buen término.

El precio del agua

A lo largo de los últimos meses ha tomado cuerpo en el área metropolitana de Barcelona un movimiento ciudadano de impugnación del recibo del agua que está empezando a alcanzar proporciones importantes. El origen de dicha movilización está relacionada con la aplicación de una nueva serie de tributos que se cargan al recibo del agua en función de la consumida, y que conllevan que el precio que figura como factura directa del agua se vea incrementado en más de un 100% por el bloque impositivo. Ello se ha traducido en la sensación de que se ha doblado la factura del agua.

Las razones aducidas por la administración para aplicar dichos impuestos se han formulado en parte en clave ecológica: hay que ahorrar agua e invertir en infraestructura hidráulica. Por ello, se argumenta, están justificados impuestos relacionados con el consumo que hagan pagar más agua a quien más derroche, y la recaudación sirva para financiar las nuevas inversiones. Parecería, ateniéndonos a estas justificaciones, que la Administración está avanzando en la aplicación de impuestos ecológicos finalistas tal como se ha venido reclamando desde estas mismas páginas.⁹ Las cosas son, sin embargo, más complejas. En muchos casos se han aplicado impuestos teóricamente finalistas, como el canon de infraestructuras hidráulicas, que en la práctica no conducen a ningún tipo de inversión y que se estarán utilizando para financiar gastos públicos normales. En otros casos se han introducido partidas que no tienen nada que ver con el consumo del agua, como es el caso de la tasa de basuras, que anteriormente se cobraba directamente por la Administración.

El hecho de que la carga impositiva obedezca a una mezcla de partidas heterogéneas permite entender mejor las razones básicas de su aplicación. Más que la racionalidad en el consumo del agua lo que parece haber predominado ha sido la capacidad recaudatoria. Es evidente que siempre es más

9. J. Riechmann, «Tasas e impuestos verdes: una herramienta de política ecológica», *Mientras tanto*, 49.

fácil cobrar impuestos cuando estos se asocian a otras operaciones que cuando se hace directamente: es más fácil recaudar la parte salarial del IRPF (que se descuenta del sueldo y por tanto no se percibe directamente como «pago») que la correspondiente a pequeños empresarios (quienes primero obtienen ingresos y posteriormente deben pagar sus tributos), o es más fácil recaudar un impuesto sobre la gasolina, camuflado en el precio, que una tasa de circulación que obliga al contribuyente a acudir al banco. La eficacia recaudatoria tenía además otro posible beneficiario: las compañías de suministro de aguas que podían contar durante unos días, los que median entre el cobro del recibo al usuario y el ingreso del impuesto en las arcas públicas, como un importante fondo financiero. En el área de Barcelona la mayoría de empresas de aguas están en manos del poderoso grupo de la Sociedad General de Aguas de Barcelona, una empresa controlada a la par por el grupo multinacional francés Dumez-Lyonnais des Eaux y la omnipresente Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, uno de los grupos con más experiencia en la «gestión» y control de servicios públicos. La operación parecía por tanto satisfacer a intereses (administración local y autonómica por un lado, grupo empresarial por otros) acostumbrados a este tipo de colaboración.

La aplicación de tal medida se traducía en un brusco aumento de uno de los gastos básicos de la población, generando un enorme descontento entre sectores populares golpeados por la situación económica. El espacio para que alguien se lanzara a plantear una reivindicación en torno a este tema era grande, aunque implicaba dificultades en la forma de llevarlo a cabo.

La respuesta se inició en algunos ayuntamientos y barrios periféricos (Badalona, Ciutat Badia, Bellvitge...) y estuvo inicialmente impulsada por entidades dirigidas por personas cercanas al Partit dels Comunistes Catalans. La lucha consiste en dejar de pagar la parte del recibo correspondiente a impuestos. Como las compañías recaudadoras no aceptan cobrar media factura se ha procedido a abrir una cuenta bancaria donde se deposita la parte del recibo que se paga, y evitar que la empresa corte el suministro alegando impago. El desarrollo de la protesta está resultando espectacular. Cuando escribo esta nota la cuenta abierta ha «recaudado» ya más de 200 millones de pesetas y las asociaciones de vecinos que se han incorporado a la campaña se han visto en muchos casos desbordadas por las colas de gente que van a gestionar la operación. Una característica general es la incidencia especial en barrios obreros. La manifestación realizada en marzo, que reunió unas cinco mil personas, constituyó una concentración de clase obrera industrial de las más nítidas que se han podido presenciar en el área barcelonesa en los últimos años. Destacaba especialmente la ausencia de los activistas de capas medias habituales en la «movida» catalana.

Pese al crecimiento de la movilización, ésta tiene connotaciones que pueden resultar preocupantes tanto para el movimiento vecinal implicado directamente como, especialmente, para las propuestas ecologistas de impuestos verdes. Si bien los impulsores del movimiento han clarificado que no se trata de una revuelta contra los impuestos sino con las fórmulas concretas con las que se aplican, no está claro que la mayor parte de personas que están practicando la autoreducción de la factura lo entiendan claramente. Los problemas pueden aparecer no sólo si el conflicto se endurece y las empresas suministradoras realizan amenazas y coacciones, sino especialmente si al final se consigue negociar un nuevo esquema impositivo, cuando la gente tenga que acabar pagando parte o el total de impuestos. Se trata en todo caso de una cuestión que ya se está planteando el movimiento vecinal y que tratará de paliarse redoblando el esfuerzo informativo y el debate asambleario.

Más estratégica resulta la cuestión para el movimiento ecologista. Con todas las trampas que tienen los impuestos impugnados, se presentan como la primera aplicación de algún tipo de impuesto ecológico, puesto que al menos sobre el papel se trata de gravar más al que más consume y de aplicar de forma finalista la recaudación a la mejora medioambiental. Es claro que en gran medida esto no es así en la práctica. Especialmente es claro que los faraónicos planes de inversión hidráulica con que sueña la Generalitat de Catalunya, lejos de perseguir la racionalización del consumo están orientados a mantener el despilfarro (por ejemplo, dentro de la promoción del nuevo turismo de lujo está prevista la construcción de 29 nuevos campos de golf a añadir a los 18 ya existentes, posiblemente con un impacto global menor que la expansión de las viviendas unifamiliares con césped que han proliferado los últimos años o la continuada promoción de una agresiva industria petroquímica). Pero es también evidente que hoy por hoy van a ser las fuerzas políticas mayoritarias las que pondrán en práctica este tipo de impuestos, creando en la población la sensación de que un impuesto ecológico es un nuevo ataque al nivel de vida de los más humildes.

La experiencia que comentamos da pistas sobre alguna de las cuestiones clave a plantearse. En primer lugar el hecho de que los impuestos no sólo tienen efectos «asignativos» (indican cuanto me cuesta cada producto) sino también distributivos. Los impuestos ecológicos, al igual que el resto de impuestos indirectos, pueden tener un claro impacto regresivo si su diseño no ha tenido en cuenta la situación desigual de grupos diversos. En el caso del consumo del agua es evidente que éste puede estar relacionado con el despilfarro, pero puede tener una relación directa con el tamaño de la unidad familiar. Tasas como las comentadas, que cambian su escalado en función del volumen de metros cúbicos consumidos por la unidad familiar, castigarán proporcionalmente más a las familias más numerosas a pesar de que su

consumo per capita sea menor. Existe por tanto un serio problema de diseño impositivo que puede provocar una respuesta, aparentemente «antiecológica» de los y las que suelen pagar casi siempre el pato.¹⁰ El problema de legitimidad se plantea además cuando es notorio el despilfarro, como en este caso del agua, en sectores sociales y actividades para quienes el recibo actual no plantea graves problemas económicos. Por esto me parece que cualquier medida de este tipo sólo va a funcionar si se enmarca en un contexto de medidas más agresivas de racionalización del consumo.

El actual conflicto resulta por tanto aleccionador en diversos aspectos. Constituye una experiencia inédita, al menos en nuestro país, de desobediencia civil. Aunque al mismo tiempo genera la necesidad de que movimientos vecinales y ecologistas desarrollen una serie de propuestas que impidan que el mismo se convierta en una simple revuelta impostiva que bloquee nuevas propuestas de racionalización fiscal y ecológica.

El precio del transporte público

El precio del transporte público no sólo constituye un elemento directo del coste de la vida (especialmente porque se trata en muchos casos de un coste directo de la actividad laboral), también constituye, vía precios relativos, uno de los factores que determina el modelo de transporte (en la medida en que el coste de uno u otro medio de transporte influya en las decisiones individuales). Por esto las variaciones de las tarifas de transporte forman uno de los ejes de aplicación de las políticas de movilidad ciudadana.

En Barcelona esta cuestión fue especialmente importante en el pasado, cuando la mayoría de la población sólo contaba con el transporte público. La primera gran movilización de masas del franquismo lo constituyó la gran huelga contra el aumento de las tarifas del tranvía y el metro en 1951. El franquismo aprendió la experiencia y mantuvo en el futuro tarifas reducidas. Las protestas se tradujeron sobre todo en demandas de servicios para conseguir que los diferentes medios de transporte (metro y bus) llegaran a la periferia. Las diversas formas de lucha, desde el rapto de autobuses para

10. Hay que ser conscientes de una dificultad básica: cuando se toman en cuenta diferencias personales en el pago de impuestos, cobro de subvenciones, o simplemente de cuotas de entrada en centros públicos, surge inmediatamente la necesidad de controlar la picaresca, lo que conlleva la creación de medidas de control que a menudo son insoporables (por ejemplo, para acceder a becas de comedor en la escuela pública se tiene que demostrar la pobreza familiar, lo que por su carácter humillante conduce en muchos casos a la infrautilización de este tipo de ayudas). Cuantos más impuestos se planteen, y más complejas sean las circunstancias en las que se implantan, mayores van a ser los problemas de este tipo.

demostrar que podían llegar a zonas inaccesibles de barrios montañosos como Torre Baró, Carmel, Roquetes... hasta el gran boicot al transporte en Santa Coloma de Gramanet, que consiguió arrancar la llegada del metro, han favorecido la extensión del transporte público aunque no se cuenten en los anales de la lucha ecológica (seguramente con razón, puesto que respondían a otros planteamientos por más que sus resultados indirectos fueran en la dirección adecuada).

La situación cambió con la llegada de los Ayuntamientos democráticos. Desde principios de los ochenta la nueva administración trató de paliar las pérdidas de las compañías de transportes públicos con subidas continuadas de tarifas.¹¹ A lo largo de la última década las tarifas han subido por encima del aumento de los costes básicos –gasolina y salarios– y consecuentemente el transporte público se ha encarecido respecto al privado. Como ya se indicaba en el número anterior de MT esta situación ha culminado a principios de 1993 con la aplicación de una subida del 21-27% en el metro (el medio más utilizado) y del 12-17% en el bus. El aumento varía según el tipo de billete. Un alza especulacular que rompe con toda la lógica antiinflacionista que propugnan las mismas autoridades.¹²

En anteriores subidas se intentaron formas de protesta que habían tenido poco éxito a pesar de que estaban apoyadas por diversas organizaciones. En esta ocasión se consiguió configurar un bloque más amplio con la participación de entidades vecinales, sindicatos y grupos ecologistas, y se planteó una jornada de lucha para el día 4 de marzo consistente en la llamada a no pagar el transporte público. Se editaron «billetes alternativos». A pesar de que la jornada tuvo problemas de convocatoria (propaganda insuficiente, producirse unos dos meses después de la subida, etc.) se alcanzó un cierto éxito. Se calcula que unas 200.000 personas entraron sin pagar, aunque esta situación se produjo en las horas que había piquetes informativos que animaban a colarse. La respuesta en estos casos era masiva, incluso si en ocasiones el piquete era de dos o tres personas. Se recogía en buena medida el disgusto de la población no sólo con un alza que se identifica con la deuda olímpica, sino también con la sensación de que la racionalización de costes se está produ-

11. El lector de MT puede encontrar información sobre la situación actual en A.R. y E.T., «Costes privados del transporte público, costes públicos del transporte privado: un problema de modelo de ciudad», *Mientras Tanto*, 53.

12. Las mayores alzas de precios en el Índice de Precios al Consumo de 1992 se ha producido en transporte público y vivienda, partidas ambas en la que los salarios han tenido poco que ver. No deja de ser curioso que a pesar de ello exista un amplio consenso entre los economistas de élite en culpar de todos los males a los salarios, cuando a menudo estos simplemente tratan de responder a las alzas de partidas básicas provocadas por la especulación o por opciones como la existente en materia de transporte público.

ciendo a costa de empeorar el servicio: las denuncias por la reducción de servicio fuera de las horas-punta, reducciones de líneas sin debate previo, etc., son constantes. Hay que contar también la actitud de apoyo de parte de los trabajadores del Metro, a los que el comité de empresa había llamado a sumarse a la convocatoria.

Aunque es un caso puntual, se ha tratado de una experiencia de lucha conjunta de sindicatos, asociaciones de vecinos y ecologistas que tiene continuidad en la mesa por el transporte público, en la que se plantean también reivindicaciones de costes: no a nuevas subidas, billete combinado para distintos medios de transporte, y de servicio, mayor intensidad de trenes y vehículos, alargamiento de los horarios (Barcelona es una de las ciudades en las que el metro deja de funcionar más temprano, a las once), y aprobación del nuevo plan de metros que está totalmente bloqueado.

En este caso existe una confluencia natural de intereses de los distintos movimientos que, por sus propias características, debería constituir uno de los ejes de construcción de una alianza verdiroja, no sólo en el plano de las organizaciones sino también de los grupos sociales. Un terreno favorable que no se puede perder y en el que en todo caso los problemas son básicamente de desarrollar formas de acción adecuadas y de superar algunas cuestiones menores.¹³

«Barcelona estalvia energia»

Un nuevo avance en esta misma línea se ha producido en torno a otra campaña que en este caso ha tenido su origen en el movimiento ecologista. Tras la experiencia de la campaña *«Viure sense nuclears»* su principal núcleo impulsor en Catalunya ha constituido la organización Acció Ecologista e iniciado diversas líneas de trabajo. La más importante por el momento la constituye la campaña *«Barcelona, estalvia energia»* en la que se plantea un plan de medidas de diverso tipo orientadas a reducir el enorme despilfarro energético de la ciudad, lo que conlleva cambios importantes en diversos aspectos de la organización municipal. También en este caso la originalidad no reside sólo en el proyecto sino en la forma de impulsarlo.

13. Las autoridades alegan que parte de los problemas del mal servicio público son debidos al corporativismo de los empleados de transportes públicos. Aduce que se oponen a la ampliación del horario de servicio y en estos momentos se plantea una liquidación del plan de pensiones con que contaban. Es innegable que en esta situación los movimientos sociales deberían trabajar para conseguir una propuesta de reforma del transporte que contemple los distintos aspectos de la cuestión, y que impida las habituales prácticas de los gestores de enfrentar al público con los empleados.

Si bien el impulso inicial ha venido del movimiento ecologista, el proyecto se ha configurado a través de una coalición en la que se integraron junto a grupos ecologistas, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) y la Unió Sindical del Barcelonès de CC.OO. Una vez configurado el proyecto, éste se ha presentado al Ayuntamiento utilizando el sistema local de participación popular. Este permite que un conjunto de entidades que representen un número suficiente de ciudadanos presente una demanda de audiencia pública, en la que el Ayuntamiento la discute públicamente con todas las personas que quieran participar. Posteriormente las actas de la audiencia son debatidas en el pleno municipal que debe tomar una decisión sobre las propuestas presentadas. Aunque limitada, es la única fórmula que permite a la ciudadanía forzar a un debate que de otra forma sería silenciado.

La propuesta elaborada en este caso era muy amplia y abordaba un conjunto de temas interrelacionados, agrupados bajo la rúbrica de transporte urbano, residuos, urbanismo, edificios municipales y fiscalidad. Se trata por tanto de exigir un plan real de acutaciones que confluyan en el doble objetivo del ahorro energético y la racionalidad ecológica. Son propuestas que se pretenden viables, aunque chocan en bastantes casos con los intereses dominantes en la ciudad. El Ayuntamiento aceptó el envite presionado por el hecho de que la audiencia era solicitada por una amplia coalición y posiblemente preocupado por el miedo a aparecer como enemigo de la cuestión ecológica, un tema sensible en el área socialista después de la experiencia francesa. El Ayuntamiento de Barcelona debe tener una especial mala conciencia ecológica cuando no sólo ha impulsado un modelo de transporte totalmente antiecológico sino que incluso fue incapaz de conseguir que su pseudoutópica villa olímpica (a la que denominaron cínicamente Nova Icària en un vano intento de presentarse como continuadores de los viejos utopistas catalanes) aplicara las más mínimas medidas de reciclado de basuras y ahorro energético.

El pleno se celebró el pasado 27 de abril y fue un pequeño éxito de participación (asistieron más de doscientas personas, la mayoría activistas de los distintos movimientos impulsores). El peso del debate estuvo a cargo de la plataforma unitaria (ved la sección de Documentos de este mismo número) y las autoridades se limitaron a expresar su buena voluntad sin adoptar compromisos. En este sentido la audiencia ha servido sobre todo como medio de propagación de unas propuestas poco habituales hasta el momento.¹⁴

14. Cabe destacar sin embargo la nula repercusión que el hecho tuvo en el «objetivo» periódico *El País*. Sus lectores poco conectados con los grupos convocantes no pudieron tener conocimiento de la celebración de una audiencia que había convocado el propio Ayuntamiento. Estamos ya habituados a esta línea informativa, en la que se suele pontificar desde editoriales o artículos de opinión de conspicuos intelectuales sobre las carencias programáticas de los movimientos sociales, con especial inquina contra el sindicalismo, y silenciar al mismo tiempo la mayor parte de actividades, programas e iniciativas que estos mismos movimientos desarrollan.

Ha sido un buen principio, aunque posiblemente el trabajo más duro esté por hacer.

Presentar una alternativa no es lo mismo que imponerla. Los socialistas que gobiernan el Ayuntamiento barcelonés están posiblemente interesados en mejorar su «pedigree» verde en una coyuntura en que deben reciclar su proyecto. Ello les puede atraer sectores jóvenes y mayor credibilidad. No parecen, sin embargo, muy interesados en enfrentarse a los poderosos grupos de presión que gobiernan la ciudad.¹⁵ Estarán por tanto dispuestos a introducir algunas reformas suaves (inicio de algún reciclaje, algún proyecto urbanístico con más zona verde de lo habitual, introducción de alguna tasa especial) pero difícilmente entrarán en el núcleo duro de la propuesta alternativa: predominio del transporte público, abandono de proyectos agresivos como el nuevo túnel de Horta, la planta incineradora de residuos o el desvío del Llobregat. Ante esta situación la cuestión central para el conjunto de promotores de la propuesta estriba en como generar un amplio movimiento social que presione para conseguir una reforma energética de la ciudad que vaya más allá de la simple reforma cosmética. De momento la única fuerza política con representación municipal que ha acogido con buenos ojos la propuesta ha sido Iniciativa per Catalunya. En su caso el problema estriba en que estamos habituados a que demasiadas veces el ala «pragmática» acaba siempre por dominar a las corrientes alternativas que apuestan con ganas a proyectos de este tipo. Está por ver si estas últimas logran por fin imponer una nueva estrategia.

El trabajo prioritario debe ser, por tanto, el de construir un movimiento social de amplia base que presione en el sentido indicado por la propuesta. Tarea más difícil que la de ponerse de acuerdo en torno a un papel. No sólo porque haya mayor o menor voluntad de llevarlo a cabo, sino porque las carencias organizativas y de efectivos a las que se ven confrontados la mayor parte de núcleos activos, sean ecologistas, sindicales, o vecinales, imponen a cada uno de ellos ritmos particulares que son difíciles de percibir por sus interlocutores (por ejemplo, el movimiento del agua no ha podido ser impulsado en barrios afectados por aluminosis porque todos los esfuerzos militantes se centran en el primer problema, en las numerosas empresas en crisis va a resultar difícil que se haga, a corto plazo, algún trabajo en materia de transporte público o urbanismo). Seguramente ello obligará a seleccionar campos de actuación en los que ya sea posible plantear algunas movilizaciones. Una tarea que exigirá un esfuerzo de interacción entre sus diferentes integrantes para abordarlos.

15. Este año, por ejemplo, la regulación del tráfico navideño fue suavizada (se ofrecía *parking* gratis durante determinadas horas) por las presiones de los grandes grupos comerciales del centro de la ciudad.

Replantear el movimiento urbano

La información que he tratado de resumir sobre distintos movimientos que están teniendo lugar en el área de Barcelona tenía como objetivo plantear una cuestión primordial. La de que no sólo existe la necesidad sino también la oportunidad de que se produzca alguna confluencia entre movimientos ecológicos, vecinales y sindicales, aunque me he detenido especialmente en la relación entre los dos primeros. Una oportunidad que nace tanto de la misma base social, que está afectada por los mismos problemas, como por el hecho más evidente de que en sectores no desdefinibles de los distintos movimientos se están abriendo paso sensibilidades de miras bastante amplias que permiten al menos afrontar los problemas con el ánimo de encontrar soluciones que tengan en cuenta las distintas variables en juego. Seguramente se mantienen aún muchas reticencias y cuestiones que dificultan el entendimiento global, pero la experiencia sugiere que todos podemos aprender mucho de este esfuerzo por globalizar nuestras demandas y articular plataformas sociales amplias. Me parece un buen síntoma la perplejidad expresada por un periodista en una rueda de prensa de la campaña «*Barcelona estalvia energia*», al indicar que su periódico no sabía bien a qué sección correspondía la noticia. Y es que los *media* son, al menos por ahora, incapaces de entender que entre los viejos y los nuevos movimientos sociales hay potencialmente muchos intereses y más esperanzas compatibles de lo que nos intentan hacer creer.